

Comunidad
de Madrid

Este documento se ha obtenido digitalmente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

Dirección General de Función Pública
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
EMPLEO

Expte: P/SER-016737/2022

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD

TÍTULO DEL CONTRATO: "SERVICIOS DE SEGUROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID"

De conformidad con lo que establecido en los artículos 28 y 116. e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, se exponen a continuación las necesidades que pretenden cubrirse mediante la contratación de las correspondientes prestaciones de este contrato y su relación con el objeto del mismo que es directa, clara y proporcional.

El presente contrato, tiene por objeto el aseguramiento de las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad civil y patrimonial que, según la normativa vigente, corresponda directa o subsidiariamente al asegurado, por daños personales, materiales y perjuicios económicos consecutivos o no consecutivos (patrimoniales puros), causados por acción u omisión a terceros en el ejercicio de su actividad incluyendo la responsabilidad que corresponda al asegurado por acciones y omisiones de las personas sobre las que el asegurado ejerza el deber "in vigilando". Asimismo, se aseguran las responsabilidades personales en que puedan incurrir los trabajadores o empleados públicos, las autoridades y personal directivo al servicio del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos incluidos en el objeto del contrato frente a terceros o frente a la Administración.

Se incluye la defensa jurídica; gastos de asistencia letrada, defensa judicial, costes procesales, incluidos los previos a la actuación judicial, siempre que la responsabilidad que derive de dichos procesos y causas no sea dolosa.

La actual concepción de la actividad administrativa en un sentido amplio, hace precisa la contratación de una póliza de seguro con el fin de satisfacer las necesidades de la Administración respecto a la cobertura de los riesgos derivados de la actividad que le es propia. La presentación de una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios contra ella supondría la iniciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, de conformidad con las previsiones contenidas en la normativa de aplicación, que en aquellos supuestos en que se reúnan de forma conjunta los requisitos esenciales exigidos (existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas, de carácter antijurídico - en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo -, imputable a la Administración - por concurrir la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño -, nexo causal - que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa-, y ausencia de fuerza mayor) determina la obligación de indemnizar.

En este sentido, aun cuando no exista una obligación legalmente impuesta, resulta a todas luces conveniente la suscripción de un contrato de seguro de estas características mediante el cual, además de cubrir los riesgos indicados, se plasme la decidida voluntad corporativa de garantizar la estabilidad en la ejecución presupuestaria, primando de esta manera la utilidad pública del aseguramiento, al satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de la administración, por cuanto resulta vinculada al giro o tráfico específico de ella.

Las necesidades administrativas a satisfacer con este contrato, radican en la conveniencia de asegurar las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad civil/patrimonial, establecida en el Art. 106,2 de la Constitución Española, que consagra el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran de sus bienes y derechos siempre que la lesión se consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos, desarrollado en los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el artículo 86 del Acuerdo Sectorial del personal funcionario de la administración y servicios de la Administración de la Comunidad de Madrid (2021-2024), dispone que “el personal funcionario incluido dentro del ámbito de aplicación del presente Acuerdo realizará sus tareas bajo la cobertura de un seguro de responsabilidad civil a partir de la fecha de suscripción de la póliza correspondiente”.

Con idéntica redacción, el artículo 141 del Convenio Colectivo vigente para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid (2021-2024) contempla esta posibilidad a favor del personal laboral.

Muchas Comunidades Autónomas disponen de pólizas de aseguramiento de responsabilidad civil/patrimonial para todo su personal. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid existe una situación dispar entre las diferentes Consejerías y Organismos, no solo en cuanto a la existencia o no de pólizas de seguro para su personal, sino además en cuanto a la cobertura que se ofrece en unas u otras, o en los diferentes organismos.

En aras del principio de igualdad, así como por evidentes razones de eficiencia, eficacia y economía, se pretende poner fin a esa situación estructurando en un solo contrato la misma prestación de aseguramiento para el personal del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid y los Organismos incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas como asegurados.

A lo expuesto, cabe añadir que es conocido el papel esencial en la economía que juegan el sector financiero en general y, en particular, el sector de seguros, de lo que deriva su importancia y el establecimiento de mecanismos tendentes a su ordenación y supervisión. Así, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, solo pueden operar en el sector en concepto de asegurador aquellas entidades autorizadas para realizar actividades de seguro, lo que evidencia y justifica la necesidad de acudir a medios externos a la Administración.

Previamente a la licitación del contrato de seguro, y al objeto de disponer de las máximas garantías de acierto en la selección de los seguros que mejor se adapten a las necesidades de la Comunidad de Madrid se tramitó por procedimiento abierto con pluralidad de criterios la licitación de un contrato de mediación y asesoramiento cuyo objeto consiste en la asistencia en el estudio y preparación para la formalización del posterior contrato de seguros así como la correspondiente asistencia en la gestión del mismo, incluida la gestión de los siniestros. El contrato fue adjudicado con fecha 9 de julio de 2021 a la empresa AON IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., por un plazo de 2 años y por una comisión del 4% de la prima neta de la póliza de seguros que se contrate y que será retribuida por la entidad aseguradora que resulte adjudicataria del contrato de seguros que se formalice.

El Presupuesto de licitación del contrato es de 8.000.000,00 euros y se ha previsto la tramitación del procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto con pluralidad de criterios en virtud de lo dispuesto en los artículos 156 y 145.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En virtud del valor estimado del contrato, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público este contrato se encuentra sujeto a regulación armonizada.

LA DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

Firmado digitalmente por: ESTEBAN RAPOSO MARÍA JOSÉ
Fecha: 2022.04.25 16:31